

En agosto, a siete meses del fin del gobierno, se presentará una estrategia que mirará a diez años

Una política de descentralización que genera suspicacias en Biobío

Una política de descentralización será presentada en agosto por el Ejecutivo. Tendrá una mirada hacia los próximos diez años y recogerá "lo que se venía haciendo desde los gobiernos de los años 2000 en adelante, cuando se toma la decisión de avanzar en una agenda de descentralización". La Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, Francisca Perales, dio cuenta de lo anterior el domingo pasado a través de una entrevista dada a este medio. No ahondó en más detalles y tampoco lo quiso hacer en los días posteriores su equipo regional y nacional, quienes tratan de mantener un hermetismo absoluto sobre lo que se viene.

Lo que se sabe es que esta política se anunció en su momento para el último trimestre de 2024, según comunicó la misma Subsecretaría en agosto de ese mismo año. Se sabe también que hubo procesos participativos con la ciudadanía y que en enero el Consejo Asesor para la Política de Descentralización de Chile —organismo que estuvo compuesto por 11 expertos y expertas— entregó al Presidente Boric su informe final, en donde se propusieron medidas que abordan dimensiones políticas administrativas, fiscales y el fortalecimiento de capacidades y condiciones institucionales. En el documento se establecieron tres temporalidades: corto plazo para el actual gobierno; mediano plazo hasta el 2030; y finalmente a largo plazo hasta marzo de 2034.

La medida anunciada para agosto, sin embargo, genera debate a nivel local. Mientras algunos actores resaltan las bases que esta política podría establecer en materia de descentralización, otros tienen una mirada crítica que se sostiene en el retroceso experimentado durante este gobierno debido a las restricciones presupuestarias que sufren los gobiernos regionales —el caso Conventos tuvo un impacto directo— y la negativa del Ejecutivo para eliminar la figura del delegado presidencial, lo que había sido comprometido por Gabriel Boric en campaña. Además, este último grupo se muestra inquieto por el momento en que será presentada la política: a nueve meses de que se termine la actual administración, es decir, prevén poco tiempo para grandes maniobras.

"SE HUBIESE ESPERADO ALGO ANTES"
 A nivel académico, el analista

Actores locales debaten sobre el anuncio de la Subdere. Algunos plantean que la medida ayudará como base, pero otros desconfían y advierten que sólo se tratará de una bandera más en período de campaña.

Por Nicolás Arrau Álvarez / nicolas.alvarez@diaribelsur.cl

político UNAB Felipe Vergara plantea que, al menos en apariencia, la presentación de esta política puede parecer tardía. Sin embargo, en términos estructurales, cree que su valor reside, precisamente, en su carácter de política de Estado con horizonte decenal. Señala que este diseño de largo plazo, que trasciende al actual gobierno, le otorga una potencia estratégica que podría cimentar transformaciones duraderas si logra ser legitimada transversalmente.

"La política no será exitosa por su oportunidad coyuntural, sino por su capacidad de ofrecer una hoja de ruta coherente, vinculante y técnicamente sólida para desatarse los nudos históricos del centralismo chileno. Se hubiese esperado algo antes de culminar su mandato, pero dejar algunos cimientos planteados es siempre relevante", señala el académico, quien insiste en que el nuevo diseño debe capitalizar aprendizajes acumulados desde los procesos de reformas de 1992, la elección de autoridades regionales a partir del 2021 y otras experiencias regionales destacadas donde el turismo, la educación superior y diversos ámbitos de procesos productivos, como el forestal, vitivinícola y de la pesca, han demostrado ser relevantes en las últimas dos décadas. Eso, sin olvidar que una descentralización requiere de una mayor autonomía financiera.

"Aun hay una ambigua coexistencia entre delegados presidenciales y gobernadores regionales, que genera duplicidades y ciertos vacíos de poder. La limitación de recursos aun son determinados centralmente, situación que se observa tanto en el ámbito público como privado. A su vez, una débil capacidad técnica y presupuestaria de muchos municipios, principalmente rurales, impide asumir nuevas competencias sin riesgo de fracaso. Por último, avanzar en temas de probidad y transparencia, con mayores controles y desarrollo profesional", dice Vergara.

Desde una mirada más interna, la profesora titular de Derecho UdeC y única experta local que participó del Consejo Asesor, Amaya Álvarez, plantea que uno de los elementos a considerar por esta política será, sin duda, el informe final que entregaron al Presidente en enero, que propone cuatro dimensiones en tres horizontes temporales, con el objetivo específico de fortalecer la gestión de los gobiernos regionales y las municipalidades.

"Creo que todas las expectativas están en el informe final que formulamos. Evidentemente, aquí han habido muy buenas intenciones. Siempre ha habido interés y es algo que no corre en el eje izquierda-derecha; es más, creo que la descentralización puede llegar a unir a personas que políticamente tienen distintas sensibilidades", señala la profesional. Parte de sus expectativas están en que dentro del corto plazo se pueda avanzar en un sistema que considere igualdad y equidad entre los territorios, "pero hay que pasar de la palabra a la acción (...). Tendríamos que esperar que

Giacaman: "Si es agenda de Estado, puede ser aporte"

Para el gobernador regional Sergio Giacaman, cuando un gobierno asume el compromiso de descentralizar el poder, ese proceso no debiera dejarse para el final del período. Insiste en que el Presidente Boric prometió entregar el país con menos poder concentrado en La Moneda, "pero lo cierto es que recién ahora, a pocos meses de dejar el cargo, se anuncia una hoja de ruta a diez años".

"Sin embargo, todo paso que

apunte en la dirección correcta suma. Si esta política logra transformarse en una agenda de Estado, y no sólo en una declaración de intenciones, puede ser un aporte. Espero que el próximo gobierno, a diferencia del actual, asuma desde el inicio el desafío de avanzar con decisión en esta materia, y no lo postergue para los últimos meses de gestión", cuestiona la autoridad.

Durante la Cumbre de las Regiones 2025, que se organizará

en Biobío el próximo 4 y 5 de agosto, se presentará un trabajo desarrollado junto a Corbio y expertos de todas las regiones del país, con el propósito de entregar contenido, propuestas concretas y una visión compartida para el proceso de descentralización. "Sería una gran señal que el Presidente asista a recibir esas conclusiones trabajadas desde las regiones, con mirada país", afirma Giacaman.

El gran tema pendiente, agre-

ga, sigue siendo la certeza fiscal y la transferencia de competencias que permitan que las decisiones se tomen efectivamente desde las regiones, y no desde Santiago, a fin de poder planificar con visión de largo plazo. "También es urgente avanzar en una transferencia de competencias sustantivas, que permita a cada región definir su propio camino según sus particularidades, sus vocaciones y su realidad", subraya.

tada autonomía fiscal real es otro tema pendiente, dado que la mayoría de los recursos aun son determinados centralmente, situación que se observa tanto en el ámbito público como privado. A su vez, una débil capacidad técnica y presupuestaria de muchos municipios, principalmente rurales, impide asumir nuevas competencias sin riesgo de fracaso. Por último, avanzar en temas de probidad y transparencia, con mayores controles y desarrollo profesional", dice Vergara.

Desde una mirada más interna, la profesora titular de Derecho UdeC y única experta local que participó del Consejo Asesor, Amaya Álvarez, plantea que uno de los elementos a considerar por esta política será, sin duda, el informe final que entregaron al Presidente en enero, que propone cuatro dimensiones en tres horizontes temporales, con el objetivo específico de fortalecer la gestión de los gobiernos regionales y las municipalidades.

"Creo que todas las expectativas están en el informe final que formulamos. Evidentemente, aquí han habido muy buenas intenciones. Siempre ha habido interés y es algo que no corre en el eje izquierda-derecha; es más, creo que la descentralización puede llegar a unir a personas que políticamente tienen distintas sensibilidades", señala la profesional. Parte de sus expectativas están en que dentro del corto plazo se pueda avanzar en un sistema que considere igualdad y equidad entre los territorios, "pero hay que pasar de la palabra a la acción (...). Tendríamos que esperar que

se tomen medidas concretas en lo que resta de este gobierno".

Clave en el proceso, añade, será comprender que existen diferencias territoriales para adecuar la toma de decisiones, generar equidad y solidaridad entre los territorios y trabajar en el financiamiento de competencias para recursos humanos, financieros y de infraestructura. El informe que ayudó a consolidar consideró 13 objetivos a alcanzar por medio de 32 medidas estratégicas, donde asoman como prioridad la coordinación para la entrega de competencias y atribuciones a los distintos organismos y niveles territoriales del Estado, la dotación de mayores mecanismos de gestión de recursos a los gobiernos subnacionales o el fortalecimiento de la identidad y cultura local.

"Me parece que hay muchas medidas que se pueden adoptar como estratégicas, algunas de las cuales se podrían implementar a corto plazo", enfatiza, además de implementar un sistema que permita evaluar el impacto descentralizador de los proyectos de ley, crear un índice de garantía descentralizadora y de desarrollo, establecer un consejo nacional para la descentralización, potenciar las municipalidades y gobierno regionales, y redefinir el rol de la Subdere como facilitador del proceso de descentralización, "porque, a veces, está en la Subdere o centralizar las decisiones y entrapar este proceso".

"NO HAY NADA MÁS QUE HACER"
 Desde Corbio indican que el Consejo Asesor hizo un muy

buen trabajo al marcar las líneas gruesas a tratar en el proceso, un proceso que "ha ido hacia atrás" en los últimos años. El presidente de la instancia, Martín Zúñiga, dice que desde el punto de esta política que presentará el Ejecutivo "no hay nada más que hacer", por lo que lo relevante será centrar la discusión en el debate presidencial para analizar la gestión de los recursos y aumentar progresivamente a un 5% —o más— el presupuesto nacional que llega a las regiones, o robustecer a los consejos regionales para que se transformen en un verdadero contrapeso de los gobernadores.

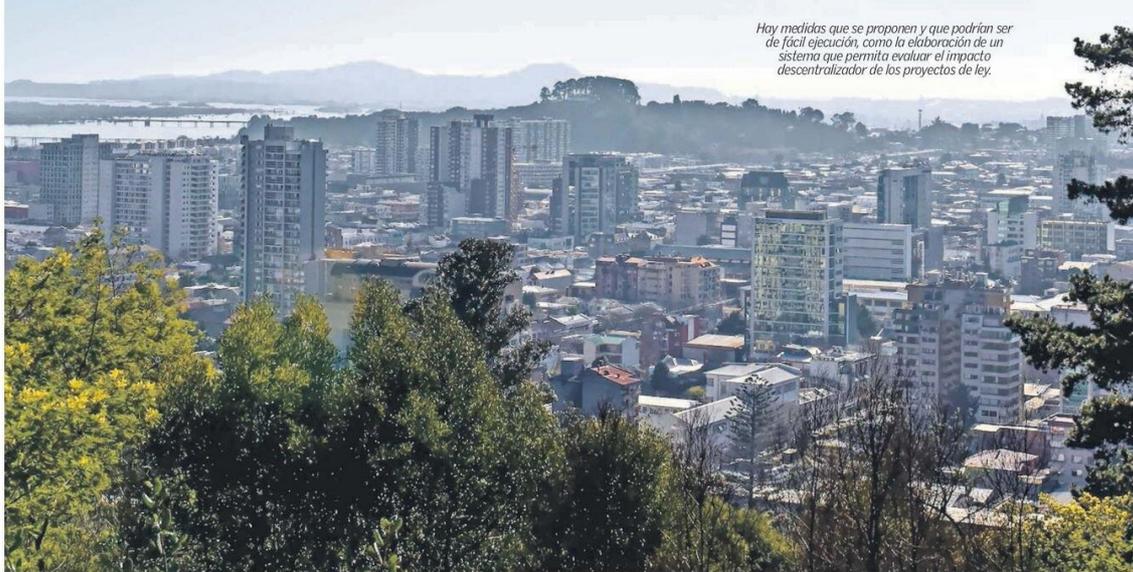
En ese debate, además, dice que será fundamental resolver la dualidad de funciones que hay entre los gobernadores y los delegados presidenciales, así como el interludio en la conversación de los gobernadores con los seremis y parlamentarios frente a la falta de vinculación que existe hoy, como el mismo advierte. "Y si se le dan más recursos a las regiones, hay que darles más competencias para que cada vez, que dentro de la estrategia de desarrollo regional se apruebe un proyecto, no se deba ir a preguntar al Ministerio de Hacienda, pero también aquí se necesita un mayor control", señala.

Con todo esto, propone igualmente la idea de descentralizar de forma rápida algunos ministerios, como Salud, Vivienda o Transportes, con pilotos a nivel regional. Esta y otras ideas han sido planteadas este año entre Corbio, los gobernadores y consejeros regionales, la Agrupación de Universidades Regionales y los municipios.

En una línea similar, la diputada del Partido Demócrata y única representante local en la comisión que analiza los temas de regionalización en la Cámara, Joanna Pérez, lamenta que los gobiernos desaprovechen la posibilidad de avanzar en más descentralización y plantea que es común que en períodos de campaña se levanten muchas banderas que después poco se cumplen. A su juicio, lo ideal hubiese sido sacar adelante y de manera previa el proyecto "Regiones más fuertes" que se mantiene en primer trámite constitucional hace más de un año en la Cámara de Diputados.

"Tenemos todo un trabajo que se había iniciado, pero se fue desperfilando, y dudo que un gobierno, a siete meses de terminar, sea capaz de poder tener la fuerza para encauzar no sólo políticas, sino que leyes que profundicen la descentralización. Creo que todavía estamos al borde de los instrumentos que se pusieron a disposición para zonas de rezago, por ejemplo", puntualiza la parlamentaria, quien si reconoce que la ley de Royalty minero fue un avance, "lo único que visualizo como positivo".

Frente a la discusión presupuestaria 2026 y los \$225 mil millones que solicita el Gobierno Regional, Pérez recuerda que los parlamentarios locales ya se reunieron con el gobernador Sergio Giacaman y que por lo mismo se proyectan nuevas reuniones, algunas con el ministro de Hacienda, Mario Marcel, para apalancar más financiamiento.



Hay medidas que se proponen y que podrían ser de fácil ejecución, como la elaboración de un sistema que permita evaluar el impacto descentralizador de los proyectos de ley.